

Sábado 16 de Noviembre 2019

Sra. Michelle Bachelet

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ginebra, Suiza

Estimada Sra. Alta Comisionada,

Me encuentro en la obligación de escribirle en forma urgente por la gravísima situación que prevalece en el Estado Plurinacional de Bolivia desde las elecciones generales del 20 de octubre 2019.

Fui Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia durante 9 años, desde el 8 de noviembre 2008 hasta el 15 de noviembre 2017. La Oficina que dirigí pudo desarrollar durante toda su estancia en Bolivia, un protagonismo importante en el acontecer nacional con numerosos aportes para la plena vigencia de todos los DDHH y la dignidad humana, para la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación y el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Vale mencionar que dicha labor pudo siempre contar con el apoyo de las autoridades del Gobierno de Bolivia y de las instituciones del Estado Plurinacional como de las organizaciones de la sociedad civil.

En estos días, con toda franqueza, me es muy difícil no concluir que toda esta obra parece haber sido hecha por nada, absolutamente nada. Totalmente en vano.

Críticos acontecimientos y olas de violencia lograron derrocar al Presidente Evo Morales Ayma, elegido democráticamente en 2014 y cuyo mandato debía terminar el 22 de enero 2020, provocando su salida hacia México en búsqueda del asilo para proteger su vida. En seguida se desató en todo el país una brutal represión policial y militar en los barrios pobres y populares y otros lugares con una violencia sistemática, racista y cruel. No cabe duda que se está desarrollando en el país, una

ruptura profunda del orden constitucional y probablemente una fractura social que difícilmente se podrá reparar.

José Miguel Insulza, Ex-Secretario General de la OEA (2005-2015) refiriéndose a este contexto afirmó, de forma categórica que “de donde se lo mire, se trata de un golpe de estado”.

Han sido impactantes los niveles de violencia sistemática y políticamente orientada que se desarrollaron en varios departamentos del país, antes y después de las elecciones generales del 20 de octubre 2019 hasta la salida del Presidente Morales, en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Oruro, Tarija y La Paz. Esta violencia se caracterizó esencialmente por ser de corte racista, discriminatoria y machista a manos de grupos de hecho violentos, irregulares e, incluso, por paramilitares armados en algunos casos. Llama la atención igualmente la participación de numerosos estudiantes universitarios en actos de brutalidad y racismo. Esta violencia respondió a numerosos llamados de algunos sectores políticos y sociales de oposición política, principalmente conducidos por el candidato presidencial opositor Carlos Mesa y el Comité Cívico de Santa Cruz y su líder, Luis Fernando Camacho. Incluso éste último hizo públicamente referencia a Pablo Escobar, el más famoso narcotraficante colombiano ya fallecido, para señalar el tratamiento que el mismo prometía infligir a los traidores de su causa.

Esta violencia se intensificó mientras el Gobierno constitucional y democrático del Estado Plurinacional de Bolivia esperaba la puesta en marcha y la conclusión de una auditoría de las últimas elecciones generales, acordada con el Secretario General de la OEA Luis Almagro. Mientras el Presidente Morales llamaba a la paz, a la no-violencia y a la paciencia para dirimir en forma democrática el conflicto surgido de la publicación de los resultados, dichos grupos violentos decretaron paros departamentales, luego nacional y se dedicaron a sembrar de manera continua y sistemática el maltrato a la gente, el caos, el terror y el racismo por medio de consignas de propaganda llena de odio y con acciones agresivas, amenazantes, violentas y racistas.

No me es posible en esta carta presentar la lista completa de estas acciones violentas, obviamente no pacíficas en absoluto. A estas alturas, basta señalar la

quema por manos criminales políticamente motivadas por la oposición política, de las sedes de cinco Tribunal Electoral Departamental (TED). Vale mencionar que estos incendios de edificios públicos electorales imposibilitaron la revisión, por la misma OEA, de la mayoría de las actas del universo de actas de estas elecciones, poniendo en entredicho los resultados obtenidos en estos departamentos por todas las fuerzas políticas. En efecto, suele pasar en cualquier elección en el mundo que, cualquier partido político o agrupación social o cualquier hacker o persona pueda intentar manipular cualquier fase de un proceso electoral y sus bases de datos a partir de cualquier lugar del mundo. Eso ocurre a menudo hoy en día y con una facilidad desconcertante.

Bajo las mismas consignas y por medio de las mismas acciones antes descritas, los mismos sectores de la oposición maltrataron indígenas Aymaras y Quechuas, principalmente mujeres de pollera en Santa Cruz, Cochabamba y otras cabeceras departamentales. Algunas personas murieron en hechos altamente condenables. Se quemaron además, en numerosas ocasiones, la Wiphala, símbolo patrio de carácter constitucional, pisoteando sin merced los derechos culturales de dichos pueblos indígenas campesinos originarios.

A partir del 10 de noviembre y después la presentación pública de un informe preliminar de la OEA sobre el proceso electoral, informe no concluyente en cuanto a la existencia de un fraude, ya observado y criticado negativamente por institutos especializados y, a mi modo de ver y según mi experiencia en la materia, muy superficial y por ende deficiente en los planos técnicos y profesionales y carente de objetividad, se produjeron aún más actos de violencia con motivación política por parte de la oposición. Se introdujeron incluso nuevos tipos de acciones como amenazas y violencia a autoridades políticas de Gobierno, a Parlamentarios del MAS, a Alcaldes (intento de linchamiento de la Alcaldesa de Vinto) y a funcionarios públicos, así como secuestros de sus familiares por grupos ilegales, para obtener la renuncia de estas autoridades a sus puestos. En algunos casos, estos actos culminaron en el incendio de sus casas y otros bienes (casa del Gobernador de Oruro, la del Presidente de la Asamblea legislativa, la del Ministro de Minería, la de la hermana del Presidente Evo Morales, y de otras personalidades). Hubo actos vandálicos y de destrucción de bienes e intento de incendio incluso a la casa del Presidente Morales!

Mientras tanto se desarrollaban dichas acciones violatorias de todas las normas de DDHH, los miembros de la policía nacional quedaron en sus cuarteles y se declararon en motín contra el Gobierno faltando, en forma grave, a su misión constitucional y a sus obligaciones de prevención y protección en materia de derechos humanos, poniendo en juego su deber de garantía de estos derechos por omisión. Las FFAA, por su parte, no actuaron conforme a las instrucciones del Gobierno del Presidente Morales.

Obviamente ante tanta violencia, y la inacción de la policía nacional, las mismas bases sociales de apoyo al Gobierno y al MAS empezaron a protestar y desataron luego a su turno acciones de violencia, en las cuales resultaron quemadas la casa de un opositor político, el hotel de otro, varios buses de transporte público, algunos comercios y puestos de policía. Estas se produjeron en reacción a las otras y no al revés. Tampoco fueron de la misma envergadura. No se asistió a la misma vorágine de acciones aberrantes y racistas que desarrolló el sector de la oposición política.

Tanto el llamado del Presidente Morales para la apertura de un dialogo con todos los partidos políticos y sectores sociales en búsqueda de una salida a la crisis, como la decisión de convocar a nuevas elecciones con nuevas candidaturas no pudieron frenar la ola de violencia de la oposición. Estas propuestas fueron rechazadas tajantemente por los opositores llevando el país al borde de una confrontación social más generalizada. En ese contexto de más alta tensión las FFAA de Bolivia, y luego la policía nacional pidieron, el 10 de noviembre, la renuncia del Presidente Morales, la cual él anunció el mismo día con el objetivo de re-instalar la necesaria paz y la tolerancia frente al clima de violencia imperante y a las acciones de secuestro y quema de casas de sus colaboradores. Luego, para apaciguar los ánimos, se retiró del país en exilio hacia México.

Desde la salida al exterior del Presidente Morales se desató una más feroz e inédita represión esta vez por los cuerpos de seguridad, FFAA y policía nacional conjuntamente, con una violencia sistemática y con lujo de barbarie y crueldad. Se cuenta hoy según la Defensoría del Pueblo de Bolivia, en tan solo 5 días del golpe de estado, por lo menos 13 muertos por balas y más de 500 heridos, muchos de gravedad y varios centenares de detenidos. Las víctimas son de los sectores más pobres y humildes del país, por lo esencial indígenas y campesinos, que participan

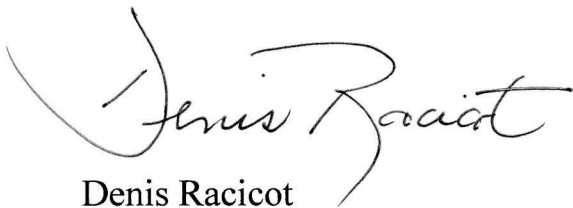
en multitudinarias manifestaciones públicas pacíficas en contra de las autoridades de facto. Muchas de las operaciones conjuntas de represión son conducidas en zonas alejadas o al favor de la noche, lejos de la vigilancia pública y de los medios de comunicación. Estos actos de represión son a todas luces, ejercidos en contravención de todas las normas de derechos humanos en materia del uso de la fuerza por agentes del estado, en contravención de las normas de los derechos de los pueblos indígenas y en detrimento del derecho a la vida y a la integridad física y a la dignidad humana más elemental.

Al finalizar esta comunicación, yo no puedo callar y evitar de señalar que las primeras actuaciones públicas de las nuevas autoridades auto proclamadas, totalmente fuera del marco constitucional, son marcadas por consideraciones de odio, con palabras coloridas por el revanchismo y la venganza. Se están violentando los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa e información con el cierre o las presiones a varios medios de comunicación, en particular los medios de televisión y radio estatales, comunitarios y algunos privados. Además se inició una campaña de odio y desprestigio de algunas representaciones diplomáticas (México, Cuba y Venezuela) así como de la Brigada de médicos de Cuba que desembocó en los últimos días en el arresto arbitrario de su jefa y otros miembros de su personal. Y debo señalar en este sentido las declaraciones y actuaciones de la Canciller Karen Longaric, la Ministra de Comunicaciones Roxana Lizarraga y el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Es mi profunda convicción luego de casi 30 años de trabajo en América Latina y en el Caribe, que urge una actuación con rigor y firmeza de vuestra organización y del Consejo de Derechos humanos. No solo es necesario pronunciarse, como viene usted de hacerlo este mismo 16 de Noviembre con firmeza frente a las violaciones masivas a los derechos humanos, sino proponer medidas concretas de solución a la crisis para hacer volver a la razón las actuales autoridades gubernamentales de facto en Bolivia y los cuerpos de seguridad, la FFAA y la policía nacional. Es necesario entonces propuestas concretas para crear las condiciones del retorno al verdadero marco constitucional e institucional, el retorno del Presidente Evo Morales al país y la puesta en marcha de un dialogo nacional y negociaciones para la preparación de nuevas elecciones generales lo más pronto posible, esta vez bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas ante el fracaso rotundo del recién acompañamiento de la OEA en el país.

La salida a la crisis actual en Bolivia no se podrá construir jamás sobre la base de una violencia golpista sin límites, que recuerda los momentos más cruentos del periodo dictatorial boliviano y de sus regímenes militares y de facto (periodo 1964-1982), por el cual se ha creado precisamente una comisión de la verdad en el país, en 2017 para construir una memoria colectiva de estos períodos inhumanos. Trae también a la memoria los siniestros recuerdos de la cruda represión del octubre de 2003 que ocasiono la huida del Presidente Sánchez de Lozada hacia los Estados Unidos, con su lote de docenas de muertos y centenares de heridos durante el intento de aplastar las manifestaciones de protestas anti-gubernamentales en El Alto.

En tan solo cinco días de un gobierno autoproclamado de facto que pretende devolver la democracia en Bolivia, se ha violado muchísimo más en cantidad y calidad los derechos humanos civiles y políticos de la población, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres, y con más barbarie y más crueldad, que en todos los casi 14 años de los distintos Gobiernos del MAS y del Presidente Morales. Nada menos!

A handwritten signature in black ink, reading "Denis Racicot". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'D' and 'R'.

Denis Racicot

Abogado

Ex-Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, OACNUDH.